

042/2025

I

En primer lugar, esta Agencia no tiene conocimiento de cualesquiera *“incidencias sobre Acuerdos ya adoptados en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”*, dado que no ha intervenido en ningún procedimiento de este tipo en relación con esta materia de Castilla-La Mancha, por lo que esta Informe no puede emitir consideración alguna a este respecto.

En segundo lugar, y en consonancia con lo solicitado, este Informe tan sólo puede ir dirigido al objeto de la petición, esto es, a la adecuación de la norma sometida a informe *“en relación con la adecuación al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”*, y ello exclusivamente respecto de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y no a ninguna competencia respecto de ninguna otra Administración o entidad pública.

II

Determinada de esta manera el posible contenido de este Informe cabe exponer que la ley 4/2025 de Castilla La Mancha se distribuye en un Título Preliminar y seis Títulos. Como su nombre indica, la norma va dirigida a promover la Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Para ello el legislador autonómico dedica el Título V de la ley a la Administración Digital, cuyos capítulos van dirigidos el I a los principios generales, el II a los derechos de la ciudadanía en materia de Administración digital; el III al modelo de Administración digital autonómica; el IV a la Inteligencia Artificial; el V al Gobierno del Dato, y el VI al Espacio Ciudadano.

En estos preceptos, y en otros esparcidos fuera de ese Título V, se hace referencia a la utilización o tratamientos de datos personales, pero sin que en ellos esta Agencia encuentre que se pone en cuestión la competencia de esta Agencia Española de Protección de Datos.

De hecho, en las menciones que se realizan a los distintos tratamientos o a los derechos de los interesados, etc. siempre se hace con la mención y la prevención de referirse a la normativa vigente en la materia, que es la que ha de regular dichos tratamientos. Así, por ejemplo, en el art. 35.2.g), al regular los principios de la Administración digital, se menciona como tal principio al de: g) *El principio de seguridad y de protección de datos, garantizando que las interacciones con la Administración digital regional aseguren su integridad y confidencialidad, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos*; o el art. 41.2 y 41.3, respecto de las actuaciones administrativas automatizadas, tanto reactivas como proactivas, establece:

2. La Administración regional fomentará el uso de las actuaciones y trámites administrativos automatizados, así como las comprobaciones y verificaciones automatizadas, en aquellos casos en los que sea posible por la naturaleza del procedimiento, conforme a la normativa vigente. Las acciones de automatización deberán incorporarse en la fase de diseño de los procedimientos administrativos competencia de la Administración regional.

3. Podrán realizarse actuaciones automatizadas proactivas, basadas en la información o datos obrantes en el procedimiento del que traigan causa, con el objeto de generar comunicaciones y avisos a la persona interesada, conforme a la legislación en materia de protección de datos.

III

Por otra parte, en el Capítulo IV del Título V, la ley regula, como se ha mencionado, el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración regional. Su art. 45.1 define “sistema de Inteligencia Artificial” de manera similar a la definición contenida en el art. 3.1) del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, (Reglamento de Inteligencia Artificial), y en el apartado 3 de dicho precepto, y de la misma manera que se hacía respecto de las actuaciones administrativas automatizadas, la utilización de los sistemas de inteligencia artificial proactivos se vincula, como no podía ser de otra forma, a la garantía de la protección de los datos personales y de los derechos y libertades de las personas destinatarias, así como de otras personas interesadas y la seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto, lo que entronca igualmente con el RGPD. Del mismo modo, en su art. 47.3, la ley regula que *[e]n la utilización de la Inteligencia Artificial, la Administración regional garantizará que la toma de decisiones derivadas de su uso cumpla con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas, trazabilidad, auditabilidad, claridad, accesibilidad,*

sostenibilidad, seguridad y protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

En conclusión, no se advierte, en principio, en la regulación contenida en la ley 4/2025 de Castilla-La Mancha, que dicha normativa ponga en cuestión las competencias de esta Agencia Española de Protección de Datos.